

BOLETIN DE NOTICIAS

COMITÉ MONS. OSCAR ROMERO DE MADRID

Argumosa, 1-6º-B 28012-Madrid. Tfno.: 91.539.87.59 Email:cmromero@nodo50.org

El Comité Mons. Oscar Romero de Madrid no se responsabiliza necesariamente de las opiniones presentadas en este Boletín. Señalamos las fuentes de donde han sido extraídas.

En caso de que no desee seguir recibiendo nuestro Boletín, por favor, comuníquenoslo por medio de un correo electrónico a la dirección más arriba señalada.

BOLETÍN NÚMERO 172

FECHA: 24 de Junio de 2013

SUMARIO

PAÍS	CONTENIDO	NºPG.
AMÉRICA LATINA	LAS TRAMAS CIVILES DE LOS GOLPES DE ESTADO EN AMÉRICA LATINA	2
BOLIVIA	UNA NUEVA GRAMÁTICA POLÍTICA	3
BRASIL	PRIMERAS REFLEXIONES	5
COLOMBIA	¿HABLAR DE PAZ EN MEDIO DE LA GUERRA?	7
GUATEMALA	VÍCTIMAS DUDAN EN VOLVER A DECLARAR EN NUEVO JUICIO A RÍOS MONTT	10
	EL GENOCIDIO CONTINÚA	11
HONDURAS	ESCANDALOSA CORRUPCIÓN EN COMPRA DE MEDICAMENTOS EN HONDURAS	13
MÉXICO	NUEVAS DETENCIONES DE INTEGRANTES DEL FNLS	15
NICARAGUA	FNT DENUNCIA COMLOT CONTRA INSS	16
PANAMÁ	AUMENTO DE DEUDA Y NECESIDADES	17
PUERTO RICO	EL PRESO POLÍTICO MÁS ANTIGUO DE AMÉRICA LATINA	17
VENEZUELA	VENEZUELA SERÁ RECONOCIDA POR LA FAO EN ROMA POR SUS PROGRESOS NOTABLES EN LA LUCHA CONTRA EL HAMBRE	19
	INFLACIÓN SUBIÓ UN 6,1% EN MAYO EL ÍNDICE ANUALIZADO SE DISPARA AL 35,2%	19
	OPOSICIÓN VENEZOLANA COMPRÓ 18 AVIONES DE GUERRA DE EE.UU.	19

AMERICA LATINA

LAS TRAMAS CIVILES DE LOS GOLPES DE ESTADO EN AMÉRICA LATINA

La muerte del dictador argentino Jorge Rafael Videla y el enjuiciamiento fallido de otro, el guatemalteco Efraín Ríos Montt, nos retrotraen a una de las etapas más negras de la historia de América Latina: la guerra contra la subversión, el socialismo-marxista y el comunismo. Para llevarla a cabo se fortaleció la alianza cívico-militar entre las clases dominantes y las fuerzas armadas, convirtiendo a la institución castrense en el partido político de la burguesía. Ya no se trataba simplemente de reponer a las viejas oligarquías en el sillón presidencial. Se buscaba asegurar el proceso de acumulación de capital dentro de una nueva versión del capitalismo transnacional, cuya esencia suponía desarticular los partidos políticos de izquierda, los sindicatos de clase, los movimientos sociales y también a las burguesías de corte nacionalistas. Quienes pensaron en esta perspectiva tenían claro que se trataba de inducir una revolución para refundar el orden político. Era obligado soltar lastre, deshacerse del sobrepeso contenido en el discurso seudodemocrático de las burguesías desarrollistas de corte keynesiano y, sobre todo, quebrar la ciudadanía, fomentando la despolitización y persiguiendo a militantes, sindicatos de clase e intelectuales de la izquierda política y social. En esta guerra se declararon ilegales las formaciones políticas de ideario marxista y socialista. De esta forma se profundizó el combate hasta el exterminio, si era posible, o en su defecto hasta conseguir una derrota total de todo cuanto oliere a socialismo. La doctrina de la seguridad nacional sirvió de anclaje y la geopolítica del fascismo dependiente le facilitó el encuadre teórico.

El Estado, cuerpo vivo, se encontraba amenazado por fuerzas que buscaban su destrucción bajo la égida de una ideología, el marxismo y el comunismo, cuyo objetivo era esclavizar a los pueblos y convertir los estados latinoamericanos en satélites de la Unión Soviética. Identificado el problema, se procedió a depurar el cuerpo social de sus enemigos internos. Gustavo Leigh, general de la fuerza aérea chilena, miembro de la junta militar constituida el 11 de septiembre de 1973, fue muy gráfico al señalar el motivo que inspiró el golpe: Había que extirpar el cáncer marxista de raíz. Y Videla, en Argentina, habló de una acción de salubridad pública. Así, las fuerzas armadas se transformaron en actores relevantes, ocupando el sitio político que les cedía, de buen grado, una timorata burguesía, que prefería lavarse las manos ante la represión y pasar a un segundo plano, no importándole en absoluto los métodos que se debían utilizar para llevar a cabo la tarea. Las fuerzas armadas eran la institución idónea para tal función quirúrgica. Constituyen una organización jerárquica, tienen el monopolio legítimo de la violencia y gozan de superioridad en las maneras de emplear la fuerza.

La guerra contra la subversión y el socialismo marxista fue definida como una guerra global y permanente. El general brasileño Golbery do Couto Silva, ideólogo de la geopolítica latinoamericana, fue claro al señalar que de estrictamente militar, la guerra se ha convertido en una guerra total, una guerra económica, financiera, política, psicológica y científica..., de la guerra total a la guerra global y de la guerra global a la guerra indivisible, y, por qué no reconocerlo, a la guerra permanente.

Sin embargo, las fuerzas armadas no actuaron por decisión propia. Fueron avaladas por los partidos conservadores, liberales y democristianos. No se sublevaron contra el poder civil en abstracto, lo hicieron contra los gobiernos populares que afectaban los intereses de las burguesías, las multinacionales y el imperialismo. Bajo su paraguas impusieron el orden neoliberal. Pinochet, será explícito: No hay plazos, hay metas. Todos los ministros de Economía, Hacienda, Trabajo o Justicia fueron civiles. Ellos manejaban los hilos de las transformaciones económicas, las reformas constitucionales y las políticas de ajustes.

No es posible entender el actual orden político neoliberal sin desentrañar el papel que cupo a los civiles en la elaboración del nuevo orden neoligárquico. La labor de limpieza política, genocidio y exterminio contó con su inestimable colaboración. Videla no se ruborizó al señalar que el asesinato de miles de ciudadanos argentinos, a manos de los servicios de inteligencia y las fuerzas armadas, fue confeccionado por empresarios, ejecutivos, profesores universitarios, jueces, dirigentes sindicales y funcionarios adscritos a la derecha peronista y las organizaciones anticomunistas. Durante la transición, los civiles tomaron distancia y se alejaron de los militares. Videla captó su alejamiento al señalar cómo "los empresarios se lavaron las manos. Nos dijeron: 'hagan lo que

tengan que hacer', y luego nos dieron con todo. Cuantas veces me dijeron: 'se quedaron cortos, tenían que haber matado a mil, a 10 mil más'".

Los conspiradores civiles, entre otros la Iglesia católica, cuyos sacerdotes actuaban en las sesiones de tortura buscando confesiones y los empresarios de medios de comunicación que ensalzaban las razias cubrían los hallazgos de los cuerpos torturados, negando su existencia o los transformaban en delincuentes comunes. En Chile, salvo excepciones, no hay civiles detenidos o encausados. Me refiero a ex ministros y altos cargos que durante la dictadura estuvieron vinculados con los crímenes de lesa humanidad y a la represión. La ministra de Justicia Mónica Madariaga declaró, en una especie de *mea culpa*, haber vivido en una burbuja y no haberse enterado de la violación de los derechos humanos. Igualmente, el primer portavoz de la junta militar, Federico Willoughby, coautor del libro blanco de la junta militar que justificó la matanza de miles de chilenos bajo un supuesto plan Z elaborado por la Unidad Popular para instaurar una dictadura comunista, lo encontramos, años más tarde, en las listas como candidato en la concertación, junto a los socialistas. Willoughby será reciclado por el presidente Aylwin como asesor de imagen. Todo un despropósito que deja a las claras la impunidad de quienes participaron en las tramas civiles de los golpes de Estado.

Y qué decir de aquellos países donde sin recurrir a la técnica del golpe de Estado, como México, Venezuela y Colombia, sus fuerzas armadas se cebaban contra la población campesina en la guerra contrainsurgente. En Centroamérica, el genocidio se convirtió en práctica habitual en Honduras, Guatemala o El Salvador. Efraín Ríos no fue el primero ni el último en cometer genocidio en el país centroamericano. Sólo su saña, tanto como el silencio de sus aliados civiles, marca la diferencia. Fueron miles las personas que sufrieron la saña de militares y fuerzas paramilitares. Les cortaban las orejas, les quitaban los dientes, los mutilaban con una crueldad enfermiza y luego podían darse el lujo de jugar fútbol con las cabezas, obligando a los sobrevivientes a presenciarlo. Guatemala es un caso de extrema violencia y de genocidio amparado por la trama civil. El mejor ejemplo es que sus fuerzas armadas siguen intactas. Al dejar sin efecto la condena por genocidio a Efraín Ríos, el poder político y el poder judicial mandan un claro mensaje: no van a permitir ningún juicio que ponga en cuestión su papel durante la guerra contra el socialismo-marxista y la subversión. Civiles y militares marcharon juntos. En eso no se diferencian de ningún otro país de América Latina.

Fuente: [Marcos Roitman Rosenmann. La Jornada](#)

BOLIVIA

UNA NUEVA GRAMÁTICA POLÍTICA

El pasado 6 de mayo los mineros de la Central Obrera Boliviana (COB), se declararon en huelga general indefinida por el incremento de las pensiones a su gremio —exclusivamente a los mineros—, por 8 mil bolivianos (1.149 dólares), y por 5 mil bs. al resto de los trabajadores (718 dólares). El Gobierno de Evo Morales se mantuvo inflexible a la demanda, argumentando falta de fondos y riesgo en la sostenibilidad del sistema solidario de pensiones. Los trabajadores radicalizaron su demanda y exigieron un aumento del cien por ciento para todos los trabajadores, considerando el monto salarial obtenido en sus últimas 24 papeletas de pago, lo que disparaba las cifras hasta, en algunos casos, pensiones de 40 mil bs. al mes (5,747 dólares), en un país donde el salario mínimo es de 1 mil bs. (144.72 dólares). Luego de 16 días de intensas protestas callejeras y del llamado de las organizaciones indígenas y campesinas a defender a su gobierno y su presidente, los mineros dieron marcha atrás y aceptaron la propuesta inicial del gobierno de 70% de aumento a las jubilaciones sobre el salario y no del 100%.

La confrontación con la COB evidenció algunas de las principales contradicciones internas y llevó a muchos a radicalizar sus posiciones. Una vez superado el conflicto, vale la pena realizar un análisis de la situación actual y los principales retos que afronta el proceso de cambio encabezado por Evo Morales.

Voladura de un puente con dinamita, repliegue y acuartelamiento policial con amenaza de motín, marchas multitudinarias en la ciudad de La Paz, bloqueos de caminos en, por lo menos, seis de nueve departamentos, intento de toma del aeropuerto de Trinidad, suspensión de clases en la

educación básica, incorporación escalonada a las movilizaciones de sectores no afiliados a la Central Obrera Boliviana, voces que clamaban “tumbar a Evo” y conformar un “gabinete de sindicalistas”... Días después, una deslucida retirada de los combativos contingentes de la COB de la ciudad de La Paz, tras aceptar la propuesta gubernamental. ¿Qué tuvo que suceder para que mineros, maestros, policías y médicos abandonaran de esa manera las trincheras?

No hay una sola respuesta para la pregunta anterior y las que se perfilan no son sencillas. Es sabido que en política nada es como aparenta y que en estos terrenos hay formas paradójicas de resolución de los conflictos. Unas veces se gana perdiendo, otras más, se pierde ganando. Pero hay también dos fórmulas implacables: perder perdiendo y ganar ganando. Estas dos últimas ecuaciones son las que sintetizan los resultados de la contienda entre el Gobierno y la COB.

Hablando mal y pronto, en esta crisis hubo dos grandes perdedores: Los grupos con intereses electorales encabezados por Jaime Solares (ex paramilitar en el gobierno de Hugo Banzer y Luis García Mesa) y otras camarillas de dirigentes sindicales, y los sectores de profesionistas históricamente privilegiados en el país, verbigracia los médicos. A la par, los indiscutibles vencedores fueron, hay que decirlo, tanto el gobierno de Evo Morales como las organizaciones indígenas y campesinas.

No basta con decir que mineros y maestros estaban equivocados en su demanda y que, finalmente, “triunfó la razón”, o que el gobierno “anti-obrero y pro-capitalista” se sirvió de “grupos de choque contrainsurgente” (movimientos sociales) para enfrentar a los sindicalistas. Lo que está de fondo no es la simple resolución de un conflicto sindical, pues no se trata de cualquier tipo de conflicto, sino que éste encierra –por la forma en que se desplegó, por los contenidos de los discursos y demandas y por los sujetos que lo protagonizaron–, las claves que hacen inteligible la actual gramática política boliviana.

Lo que fue derrotado con la capitulación de la COB fue todo un modo de hacer política, casi un método de presión ante un Estado que, tarde se han dado cuenta los obreros, ha cambiado. Los derrotados fueron los grupos políticos que enarbolaban demandas particulares en detrimento de las universales, llegando al exceso de proponer que los recursos de la Renta Dignidad se inyectaran al fondo de pensiones para pagar las jubilaciones de los movilizados al ciento por ciento de su salario actual.

Quienes han sido derrotados son los grupos políticos enquistados en la COB que todavía no alcanzan a vislumbrar los cambios sociales, políticos, económicos y culturales que operan en Bolivia desde hace más o menos una década, –de ampliación/reinvención de la democracia y la política–, instaurados por las mayorías indias y campesinas de este país. Perdieron los que no repararon en los cambios estructurales de más larga data sufridos en toda Latinoamérica, que hicieron del obrero, el minero o el trabajador fabril, no la clase predestinada a hacer la revolución, sino un conglomerado más de desposeídos que bien pueden hacer parte de ella si saben aliarse a las grandes mayorías indias de Nuestra América. La pretendida vanguardia obrera pasó por alto el cambio de época de la región, que se expresa en un nuevo tiempo de luchas, resistencias y cristalizaciones emancipatorias: con protagonismo indio, con proyectos de sociedad que ponen en el centro la lucha por la descolonización –en el plano material y simbólico–, la recuperación del Estado y la construcción de lo plurinacional.

Los dirigentes de la COB que llevaron a sus bases a la huelga general indefinida por una demanda gremial que escondía intereses político-electorales personales (la construcción del Partido de los Trabajadores y su posicionamiento mediático), no calcularon que el actual gobierno puede ser tanto o más revolucionario que ellos, pues es el representante de una voluntad general de poder emanada de movimientos indígenas y campesinos. Se les olvidó que el presidente Evo Morales es también sindicalista, que cotidianamente somete su gestión a la evaluación de federaciones sindicales y que goza del apoyo activo de diversos movimientos y organizaciones sociales, indígenas y campesinas, lo que ya marca un desplazamiento importante en la relación Estado-Movimiento Social.

En el fondo, lo que fue derrotado fue un discurso, “el de la clase obrera”, que pudo ser válido para un lugar y un momento histórico específico, pero que carece de sentido en un país donde primero se nace indio y luego se llega a ser minero, campesino o artesano, algunas veces maestro o policía,

casi nunca médico. Es decir, donde la contradicción primera y fundamental es la étnica, a partir de la cual se estructura y articula el resto de las contradicciones. Esto es lo específico de Nuestra América, de Bolivia, de ahí el fracaso de un actor que importa recetas de revoluciones y cree firmemente en que a su clase le corresponde, por decreto, el papel protagónico en la Historia.

Sin embargo, no es una derrota de todos los obreros, al menos no de los que realmente se movilizaron por una demanda justa, pues, también es cierto, estos trabajadores requerían con urgencia una mejor jubilación, y la consiguieron. Los derrotados fueron grupos como los de Jaime Solares, para quienes el objetivo no era el aumento en las jubilaciones sino aprovechar y crear una coyuntura política que posicionara sus proyectos electorales personales, perfilara a sus futuros liderazgos y desgastara al gobierno de Evo Morales con miras a las elecciones de 2014.

René Zavaleta dijo, refiriéndose a la “rosca” (oligarquía minero-exportadora de principios del siglo XX conformada por tres familias: Patiño, Hoschild y Aramayo), que su incapacidad de convocatoria hegemónica se debía a su visión endogámica de reproducción interna, y puede ser que algo similar le haya ocurrido a “la clase obrera”; pues los mineros, los fabriles y los maestros, en lugar de proponer y construir junto a las organizaciones campesinas e indígenas hoy en el gobierno, se limitan a hacer pliegos petitorios, cuando su lugar histórico está junto a los indios trazando proyectos sociales.

El llamado que surgió desde las organizaciones sociales en el cabildo de La Paz del 23 de mayo, de “refundar la COB”, da cuenta de la profundidad de la crisis de esta forma (sindicato obrero) y de este modo de hacer política, que no se corresponde con los tiempos que corren. Por su parte, las bases de la COB ya habrán sacado algunas conclusiones de esta aventura, no en vano la asamblea de mineros de Huanuni tomó el acuerdo de rebajar el sueldo de los mineros que ganen más de quince mil bolivianos. En sus manos está la oportunidad histórica de refundar la Central Obrera Boliviana, de arrebatársela a líderes y grupúsculos corruptos y ponerla a la altura de los desafíos.

Fuente: [Rebeca Peralta Mariñelarena](#). Viento Sur

BRASIL

PRIMERAS REFLEXIONES

El movimiento, que se inició como resistencia al aumento de las tarifas del transporte, fue inédito y sorprendente. Quién crea que puede captar de inmediato todas sus dimensiones y proyecciones futuras, muy probablemente tendrá una visión reduccionista del fenómeno, forzando la realidad para defender planteamientos previamente elaborados, para confirmar sus argumentos, sin dar cuenta del carácter multifacético y sorprendente de las movilizaciones.

No vamos a intentar esto en este artículo, solo queremos sacar algunas conclusiones que nos parecen claras.

1. La anulación del aumento (de los pasajes) constituye una victoria del movimiento y muestra la fuerza de las movilizaciones, más aún cuando se apoyan en una reivindicación justa y posible, tan es así que se pudo concretar.
2. Esa victoria, en primer lugar, refuerza concretamente el criterio de que las movilizaciones populares merecen la pena, sensibilizan a la gente, permiten hablar a toda la sociedad y sirven como fuerte factor de presión sobre los gobiernos.
3. Además de eso, el movimiento puso en discusión una cuestión esencial en la lucha contra el neoliberalismo: la polarización entre intereses públicos y privados, y el tema de quién debe financiar los costes de un servicio público esencial que, como tal, no debería estar sometido a los intereses de las empresas privadas, movidas por el lucro.
4. La conquista de la anulación del aumento se traduce en un beneficio para las capas más pobres de la población, que son las que usualmente utilizan el transporte público, demostrando que un

movimiento debe buscar abarcar no sólo las reivindicaciones de cada sector de la sociedad en particular, sino atender las demandas más amplias, especialmente las que tiene a ver con los sectores más necesitados de la sociedad y que tiene más dificultades para movilizarse.

5. Tal vez el aspecto más esencial de las movilizaciones haya sido el de posibilitar que amplios sectores de la juventud entren en la vida política, sectores no contemplados por las políticas gubernamentales y que, hasta aquí, no habían encontrado sus formas específicas de manifestarse políticamente. Esta puede ser la consecuencia más permanente de las movilizaciones.

6. Quedó claro también que los gobiernos de diferentes partidos, unos más (los de derecha) y otros menos (los de izquierda), tienen dificultades de relacionarse con las movilizaciones populares. Toman decisiones importantes sin consultar y cuando se enfrentan con resistencias populares, tienden a reafirmar tecnocráticamente sus decisiones –“no hay recursos”, “las cuentas no cuadran”, etc.– sin darse cuenta de que se trata de una cuestión política, de una justa reivindicación de la ciudadanía, que está apoyada en un inmenso consenso social, que deben encontrar soluciones políticas, para lo cual los gobernantes fueron elegidos. Sólo tras muchas movilizaciones y de desgaste de la autoridad de los gobernantes, se toman las decisiones correctas. Una cosa es afirmar que se “dialoga” con los movimientos, otra es enfrentarse efectivamente con sus movilizaciones, más aún más cuando estos resisten las decisiones tomadas por los gobernantes.

7. Ciertamente un problema que el movimiento enfrenta son las tentativas de manipulación externas. Una de ellas, representada por los sectores más extremistas, que buscan insertar reivindicaciones maximalistas, de “levantamiento popular” contra el Estado, para justificar sus acciones violentas, caracterizadas como vandalismo. Son sectores muy pequeños, externos al movimiento, con infiltración policial o no. Consiguen el destaque inmediato que la cobertura mediática promueve, pero fueron rechazados por la casi totalidad de los movimientos.

8. La otra tentativa es de la derecha, claramente expresada en la actitud de los medios tradicionales. Inicialmente éstos se opusieron al movimiento, como acostumbran a hacer con toda manifestación popular. Después, cuando se dieron cuenta que podría representar un desgaste para el gobierno, la promovió e intentó insertar, artificialmente, sus orientaciones dirigidas contra el gobierno federal. Estas tentativas fueron igualmente rechazadas por los líderes del movimiento, a pesar de que un componente reaccionario se hizo presente, con el rencor típico del extremismo derechista, magnificado por los medios tradicionales.

9. Es de destacar la sorpresa de los gobiernos y su incapacidad para entender el potencial explosivo de las condiciones de vida urbanas y, en particular, la ausencia de políticas para la juventud por parte del gobierno federal. Las entidades estudiantiles tradicionales también fueron sorprendidas y estuvieron ausentes de los movimientos.

10. Dos actitudes se distinguen en el transcurso de las movilizaciones: la denuncia de que estaban siendo manipuladas por la derecha –cuestión claramente expresada en la acción de los medios tradicionales– y las tentaciones de oponerse al movimiento. Y la segunda es la de exaltar acríticamente al movimiento, como si éste encarnara proyectos claros y de futuro. Ambas son equivocadas. El movimiento surgió de reivindicaciones justas, promovido por sectores de la juventud, con sus actuales estados de conciencia, con todas las contradicciones que tiene un movimiento de este tipo. La actitud correcta es la de aprender del movimiento y actuar junto a él, para ayudar a que tenga una conciencia más clara de sus objetivos, de sus limitaciones, de las tentativas de ser usado por la derecha y de los problemas que suscitó y la manera de llevar a cabo la discusión de su significado y mejores formas de enfrentar sus desafíos.

El mayor significado del movimiento va a quedar más claro con el tiempo. La derecha sólo se interesará en sus estrechas preocupaciones electorales, en sus esfuerzos desesperados para llegar a la segunda vuelta en las elecciones presidenciales. Sectores extremistas buscarán interpretaciones exageradas en el sentido de que estarían dadas las condiciones para impulsar alternativas violentas, lo cual se vaciará rápidamente.

Lo más importante son las lecciones que el propio movimiento y la izquierda –partidos, movimientos populares, gobiernos– puedan sacar de la experiencia. Ninguna interpretación previa da cuenta de la

complejidad y de lo inédito del movimiento. Probablemente la mayor consecuencia sea la introducción de la temática del significado político de la juventud y de sus condiciones concretas de vida y de expectativas en el Brasil del siglo XXI.

[Emir Sader](#) - Carta Maior

COLOMBIA

¿HABLAR DE PAZ EN MEDIO DE LA GUERRA?

El padre Javier Giraldo es, tal vez, el más reconocido defensor de los derechos humanos en Colombia y un duro crítico de las políticas de los últimos gobiernos. Los actuales diálogos de paz, las perspectivas que éstos definen para el país y las expectativas y posibilidades realidades de millones de colombianos de vivir en un país con dignidad y justicia social son parte de las reflexiones que compartió en entrevista con **El Turbión**.

Katerin Céspedes: –¿Cómo se puede entender el concepto de paz, teniendo en cuenta el momento actual de la guerra en Colombia?

Javier Giraldo: –Creo que hay varias maneras de enfocar la paz. Una es cuando se piensa en ponerle fin a una violencia mediante el equilibrio de las fuerzas y la otra es mediante la supresión de una de ellas. Esta última parece ser la manera en que la entiende el gobierno y mucha gente en Colombia: terminar con una serie de hechos de violencia pero tratando de exterminar a una de las fuerzas.

Pienso que el verdadero sentido de paz está en enfrentar las causas que han dado origen a los hechos de violencia. Ésta sería una paz más auténtica y más duradera porque, si solamente se enfrentan las consecuencias y no las causas, el germen de la violencia sigue vivo y en cualquier momento se reactiva. En cambio, si se enfrentan las causas pues realmente se está construyendo paz.

KC: –¿Cómo se pueden articular las luchas de los diferentes movimientos sociales hacia la consecución de la paz con justicia social?

JG: –Pienso que el último ciclo de violencia en Colombia, que lleva casi sesenta años, se ha desarrollado precisamente porque existe una situación de violencia institucional y de violencia estructural, lo que lleva a que aparezcan grupos armados. Si no se enfrenta esa raíz que es la injusticia social, entonces, realmente no se está construyendo paz.

En Colombia llevamos como mínimo treinta años en procesos de paz. El primero de este [actual] ciclo lo inició el presidente Betancourt en el año 83, hace treinta años. Yo digo que ha habido dos grandes modelos en todos los procesos que han venido de allí para acá. Un modelo ha sido el de aceptar una agenda de reformas sociales, por lo menos para discutir las. Ése fue el modelo de Betancourt, que se planteó en la reforma agraria, en una reforma política, pero ése ha sido el modelo más fracasado. El modelo de Pastrana en el Caguán también tenía ese mecanismo, de proponer una agenda de cambios sociales para discutir de más de cien puntos, y también fracasó.

Por el contrario, el otro modelo ha sido simplemente la desmovilización de los combatientes, sin tocar para nada al conjunto de la sociedad y sin proponer ninguna reforma social o algo que le interese al conjunto de la sociedad. A mi modo de ver, ése ha sido el modelo [de desmovilización] más exitoso y se empleó en los gobiernos de Barco y Gaviria. Con este modelo se lograron desmovilizar algunos pequeños grupos, que ya habían decidido retirarse de la guerra por todos los problemas que ésta trae, pero esto no tuvo ninguna incidencia en la sociedad, no la tocó.

En este sentido, pienso que el modelo de paz que mira las causas de la injusticia es el modelo de agenda de negociación. En La Habana se maneja una agenda de reformas sociales. Un punto positivo dentro de esto es que los otros modelos han tenido unas agendas enormes, mientras que ésta solamente tiene seis puntos que son cruciales. Sin embargo, este modelo también se envuelve en una serie de contextos que son muy preocupantes y que no dan mucho optimismo sobre el resultado. Lo más preocupante es que el gobierno haya querido desarrollar este proceso de paz en

medio de la guerra y de su intensificación: el presidente recurrentemente está diciéndole al ministro de Defensa que hay que activar las acciones de guerra contra la insurgencia y uno no entiende cómo puede ser eso porque, si hay una convicción de que este conflicto tiene causas sociales y políticas y de que la solución para eso es el dialogo y la negociación, ¿por qué se continúa de una manera tan intensa la guerra? Es como si realmente no estuvieran convencidos. También se está desarrollando en medio de un discurso muy ofensivo, muy belicoso, que no favorece la paz y el hecho de estarse insultando todos los días lleva a incentivar más la guerra.

Otro aspecto preocupante es que se haya querido presionar las conversaciones para que se acaben rápido cuando se trata de problemas tan de fondo que no se pueden discutir ni solucionar en tan poco tiempo. Además, se quiere ligar toda la negociación a objetivos políticos a corto plazo, como por ejemplo la reelección, lo que desfigura profundamente el proceso de paz.

KC: –Desde diversos sectores sociales existe un interés por participar en la agenda que se está negociando en La Habana, puesto que hay puntos que se están negociando sin recoger su opinión. ¿Cree que desde el gobierno y la guerrilla hay disposición para escuchar esas voces?

JG: –Creo que el gobierno ha querido que a estas conversaciones se les dé una carácter privado, como si fuera un problema sólo de la guerrilla con el gobierno. Pero los mismos seis puntos que han escogido para la agenda muestran que [la guerra y la paz] le interesa a todo el país, que no es un problema sólo entre la guerrilla y el gobierno sino de toda la sociedad colombiana.

Por ejemplo, el problema de la tierra, que es el primer punto, es nacional. Simbólicamente fue el origen de las FARC, pues se configuraron como un grupo [campesino] de defensa de la tierra para no dejársela quitar en un momento en que había un despojo masivo y violento de la tierra. Hay una motivación histórica para que éste sea el primer punto y hoy en día este es un problema que afecta a toda la sociedad colombiana. Los desplazados son varios millones de campesinos que han sido despojados de sus tierras. Por eso, esta discusión no se puede centrar en un recinto cerrado fuera del país entre la guerrilla y el gobierno: toda la sociedad debería estar participando en [la discusión sobre] el problema de la tierra.

Y ha participado, de una manera mínima, a través de estos foros que se han organizado y, por ejemplo, uno de los puntos que ha salido a la luz y que se ha afirmado en estos pequeños espacios de participación de la sociedad colombiana es el de las zonas de reserva campesina. Para mí, es un problema crucial porque esto ya estaba previsto en la reforma agraria del año 86 como un modelo legal. Sin embargo, el gobierno le está poniendo todas las trabas posibles para que esto no sea una realidad, sobre todo porque ahí se ven las diferencias.

¿Cuál es la expectativa del gobierno y de la clase dominante en Colombia sobre ello y cuál es la expectativa del movimiento social? El gobierno quiere que esto llegue a una especie de repartición de títulos de propiedad a los que fueron despojados, pero entregarles títulos es permitir también que esa tierra vuelva al mercado y se pueda vender y viene una forma de despojo que es cambiar la masacre por el mercado. Entonces, el efecto es el mismo: el campesino queda despojado de la tierra ya no en forma de masacre sino en forma de mercado, porque el campesino es débil frente al empresario y éste lo puede sobornar, lo puede presionar por dinero. El despojo de la tierra es hoy un fenómeno que se sigue desarrollando.

Ahora viene el problema de la participación política, el segundo punto [de la agenda], y pienso que es el problema más importante, porque aquí se están jugando cosas muy de fondo, lo dice la agenda de negociación. El problema no es que participen en las elecciones unos líderes guerrilleros y todo se está centrado ahí. Todos los grandes y masivos medios de comunicación están enfocando el problema como si fuera el que Iván Márquez o que 'x' líder participe en las elecciones o no, cuando el problema de fondo es la participación política de la sociedad civil como sociedad colombiana, que a mi modo de ver no existe. Es decir, aquí hay cuatro grandes barreras para la participación del pueblo en la toma de decisiones que lo afectan: primero está la barrera cultural, que es todo el problema de los medios de comunicación; está la barrera económica que es lo que impide que en unas elecciones puedan participar los movimientos populares; está la barrera política, [es decir], ¿quién tiene en sus manos el aparato electoral?; y luego está la barrera militar.

A mi modo de ver, la barrera cultural es la más profunda y la más global. Y es que en Colombia llaman libertad de prensa al hecho de que gente muy adinerada, los grandes conglomerados económicos, puedan informar lo que quieran. Eso, para mí, no es libertad de prensa, es simplemente convertir el derecho a la información en una mercancía.

¿Quiénes tienen los medios masivos de comunicación hoy en día en Colombia? ¿Quiénes son sus propietarios? Multinacionales supremamente poderosas y ellas son las dueñas del cerebro de los colombianos porque, a través de una información que siempre es sesgada y manipulada, hacen que la lectura de la realidad que tiene el pueblo colombiano sea la que ellos quieran, que la valoración de ideas, de proyectos, de personas esté a cargo de ellos. Es un lavado de cerebro que hace que la gente ya no pueda pensar por sí misma ni saber qué es lo que está pasando en la realidad ni tener una lectura libre de la realidad nacional.

La información y la verdad se convirtieron en una mercancía, entonces, la posibilidad de que el pueblo se comunique con el pueblo se perdió. ¿Cómo puede saber un campesino qué están pensando otros campesinos? Eso se podría hacer si la radio, si la televisión estuviera dándole cabida a las ideas de los campesinos, de los sindicalistas, de todos los movimientos populares. Cuando se oyen los programas de opinión nacional, ¿quiénes son los invitados allí? Son exministros, empresarios, militares, pero la gente de la base no es escuchada y no se puede comunicar a través de los medios masivos de comunicación. Pienso, entonces, que para poder tener una verdadera participación de la gente la primera barrera que hay que derribar es la barrera cultural, es decir, la posibilidad de expresión, de comunicación, de información, pero de información verdadera.

En varios foros he propuesto que, para que exista una verdadera participación, debería exigirse un mínimo nivel de democratización de la información y tomo como ejemplo lo que sucedió hace unos años en Urabá. Un periódico regional se dio cuenta del baño de sangre que había en Urabá y puso a disposición de todos los actores políticos y armados de Urabá entre cuatro y seis páginas semanalmente. La idea era que en vez de que se lanzaran balas se lanzaran palabras e ideas, y puso unas reglas de juego para que todas las instituciones y los grupos se pudieran expresar. Durante unos cuatro meses que duró ese experimento, se expresaron con el mismo derecho, en treinta líneas, los sindicatos, las cooperativas campesinas, los concejos municipales, los partidos políticos, las iglesias, los grupos guerrilleros, los grupos de oposición. Todo el mundo comenzó a expresarse. Por desgracia, este experimento solo duró cuatro meses y cuando yo miraba esto me preguntaba: ¿por qué esto debe depender de la buena voluntad de un periódico que ofrece como acto de generosidad el que todo el mundo se pueda expresar, cuando esto debería ser la ley?

Tanto radio, como noticieros y revistas deberían tener esta posibilidad. Esta sería la manera de democratizar el derecho a la información, pero estamos muy lejos de eso y sin ello hay que preguntar: ¿qué ganamos si un guerrillero y un sindicalista pueden participar en las elecciones, que son siempre manipuladas y están en manos de una élite, si no hay posibilidades de expresar ideas, de comunicar las ideas entre los grupos de base?

El otro elemento es la barrera económica, porque los únicos que pueden participar en las elecciones en Colombia son los que tienen mucho dinero. Si un candidato no tiene el respaldo de empresas muy poderosas, las cuales desgraciadamente hoy en día son las del narcotráfico, no puede participar en las elecciones. Y eso lo comprobó la Corte Suprema de Justicia cuando empezó a investigar el tema de la parapoltica.

Ahí viene el tema de la tercera barrera, la barrera política, pues el que tiene en la mano el aparato electoral es el narco paramilitarismo. Esto lo ratificó también la Corte Suprema. Ellos son los que eligen al parlamento, al presidente. Mientras esta barrera no se derribe creo que no hay participación.

La última barrera que también es terrible es el paramilitarismo, que está hecho para impedir que movimientos sociales puedan llegar al poder, como sucedió con la Unión patriótica. [Los paramilitares] no tienen problema en exterminar y matar a miles de personas con tal de que esas ideas [de los movimientos populares] no puedan llegar al poder.

Pienso que estamos muy lejos de una participación del pueblo en las decisiones que lo afectan y creo que esto es lo que se debe plantear en la mesa de La Habana. La participación no es un problema de que un líder guerrillero vaya a participar en unas elecciones que están en manos del narco paramilitarismo sino de cómo se derriban las cuatro barreras para que el pueblo realmente pueda participar.

KC: –¿Cuál es el balance que podría hacer del movimiento social, tanto en el pasado, como en el presente y en el futuro, con relación a los procesos de paz?

JG: –Cuando se dio el primer proceso de paz con Betancourt había una euforia de participación muy grande y fue entonces cuando se creó la Unión Patriótica. La Unión Patriótica no fue un partido creado por exguerrilleros sino que allí confluyeron muchas corrientes que estaban descontentas con el gobierno, con el Estado, y hubo una gran euforia de participación, pero vino el genocidio y todo eso se cortó. Después vinieron muchos años de silencio, de parálisis política.

Hubo otra pequeña euforia cuando lo del Caguán pero eso murió también. Creo que últimamente sí hay un resurgimiento del movimiento popular y hay una confluencia que hay que incentivar más, porque hay movimientos alternativos, pero separados. Sin embargo, ha habido intentos de confluencia y lo más importante es que lleguen a tener una agenda muy clara que se pueda llevar a las conversaciones de La Habana.

También debe preguntarse: ¿qué es lo que busca el movimiento social en Colombia? ¿Cuál es su agenda? ¿Cuáles son sus propuestas? ¿Cuál es su programa? De hecho, ésta es la esperanza que hay en estos momentos, que hay un resurgimiento del movimiento social.

KC: –De acuerdo a lo que usted ha dicho en cuanto a la necesidad de un cambio cultural en Colombia, ¿cree que el país y la sociedad civil se encuentren preparados para el diálogo con todo lo que ello implica, es decir, la escucha y el reconocimiento por parte de quién por años ha sido visto y tratado como el enemigo?

JG: –Creo que el país no está preparado para esto porque estamos dominados por la misma estructura, por las mismas instituciones, por los mismos mecanismos que han llevado a la violencia. Por eso, a mí me parece muy equivocado el enfoque de la participación porque el problema [que enfocan allí] es si dos o tres [miembros] de las FARC van a participar en elecciones.

Debemos empezar a salir de las estructuras y las instituciones que han llevado a la violencia y, para mí, la más profunda de todas es el problema de la comunicación y de la información. Mientras no lleguemos a un mínimo grado de la democratización de éstas, estamos construyendo todo sobre arena y eso se derrumba. En la época de las negociaciones del Caguán yo estuve presente y les dije y repetí que si no se le cambia el carácter de mercancía a la comunicación y la información, y la convertimos en una comunicación real del pueblo con el pueblo, manejando información verídica de lo que está pasando en el país que no esté en manos de multinacionales ni de grandes conglomerados económicos, no vamos a poder prepararnos para la paz. Para mí esa es la base de las bases.

Por: Katerin Céspedes

GUATEMALA

VÍCTIMAS DUDAN EN VOLVER A DECLARAR EN NUEVO JUICIO A RÍOS MONTT

En Santa María Nebaj reina el miedo y la desconfianza. Los vecinos de este municipio indígena del noroeste de Guatemala creen que volverán a presionarlos para que no repitan los desgarradores testimonios de violaciones a los derechos humanos que prestaron en el juicio al exdictador Efraín Ríos Montt.

La incertidumbre de los testigos ixiles se instaló al conocer que pueden ser convocados para contar otra vez su trágica historia en nuevo juicio, después de que la Corte de Constitucionalidad (CC)

acogió una de las tantas recusaciones presentadas por la defensa de los acusados y dejó sin efecto el tramo final del proceso a Ríos Montt.

Esa decisión anuló la sentencia a 80 años de prisión que le habían dictado el 10 de mayo.

Según la CC, el juicio debe volver atrás en el tiempo y retomarse a partir de lo actuado hasta el 19 de abril, cuando el Tribunal Primero A de Mayor Riesgo, presidido por la jueza Yassmín Barrios, ya había escuchado la mayoría de los testimonios y analizado los peritajes, y únicamente faltaba que la parte acusadora y la defensa resumieran sus argumentos y se dictara sentencia.

Como la ley guatemalteca prohíbe que una misma corte vuelva a emitir una opinión sobre un mismo caso, las nuevas actuaciones quedarán en manos del Tribunal de Mayor Riesgo B. Este tiene ya 21 procesos en su agenda, lo cual significa que el nuevo juicio a Ríos Montt y a su jefe de inteligencia, José Mauricio Rodríguez Sánchez, se programaría recién para abril de 2014.

La corte presidida por Barrios había concluido que el jefe de la dictadura desde marzo de 1982 al 8 de agosto de 1983 “tuvo el poder absoluto por lo que tenía pleno conocimiento de los crímenes ejecutados y no los detuvo a pesar de tener el poder de hacerlo”.

Así, Ríos Montt fue encontrado culpable de genocidio y delitos contra los deberes de humanidad, mientras que Rodríguez Sánchez fue absuelto, ya que se consideró que no existía suficiente evidencia para demostrar su involucramiento en esos crímenes.

Ese fallo significó un momento histórico, no sólo para Guatemala sino para muchos países latinoamericanos y de otras regiones que sufrieron experiencias represivas similares, ya que fue la primera vez que un exgobernante era condenado por genocidio por un tribunal de su propio país.

Extraños visitantes

Días después de que 98 ixiles narraran ante el Tribunal Primero A de Mayor Riesgo masacres, violaciones grupales contra mujeres y niñas, torturas y ejecuciones de que las habían sido víctimas o testigos, llegaron varias personas a la comunidad, quienes aseguraron que eran de un ente gubernamental dedicado al fomento del desarrollo agrícola y que realizaban un censo.

Pero la visita de los supuestos funcionarios despertó sospecha, ya que únicamente se dirigieron a las viviendas de los testigos y conocían de antemano sus datos personales, incluyendo sus nombres y el número de su documento personal de identificación.

Los indígenas los miraron con recelo y luego reportaron el incidente a la sede local del no gubernamental Centro de Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH), que es querellante en el juicio.

CALDH comprobó que no existía ningún registro de la supuesta entidad y, ante ello, presentó una denuncia en el Ministerio Público y en la Procuraduría de los Derechos Humanos, exigiendo garantías de seguridad para los testigos y sobrevivientes de la represión.

Las víctimas, de cualquier forma, estaban decididas a buscar justicia. “Desde que empecé a luchar no tengo miedo, confío en lo que estoy diciendo. Necesitamos una sentencia real”, dijo a IPS el líder ixil Antonio Caba, el 12 de abril, días después de haber narrado ante los jueces las masacres y torturas que presencié, cuando tenía 11 años.

Lograr que las víctimas vencieran el miedo y se atrevieran a contar historias tan dolorosas y traumáticas ante un tribunal fue un proceso largo que requirió muchos años de acompañamiento psicosocial, explicó a IPS el portavoz del CALDH, José Rodríguez.

Bajo el mandato de Ríos Montt, el ejército y los paramilitares conocidos como Patrullas de Autodefensa Civil cometieron 334 matanzas, 19.000 asesinatos y desapariciones forzadas, destruyeron 600 aldeas y un millón de personas se vieron obligadas a dejar sus hogares, según la Comisión para el Esclarecimiento Histórico.

Esta comisión fue creada por la Organización de las Naciones Unidas, a partir de los Acuerdos de Paz de 1996 entre el ejército y la entonces insurgente Unidad Revolucionaria Nacional

Guatemalteca, con el fin de investigar las violaciones a los derechos humanos perpetradas en los 36 años de conflicto armado interno en Guatemala.

Algo sucedió camino al foro

A lo largo del juicio, la defensa había presentado una retahíla de amparos relacionados con presuntas ilegalidades en la forma en que se había conducido el caso.

El último de los recursos, una de varias recusaciones planteadas contra la jueza Barrios, había sido rechazado y el juicio siguió adelante hasta lograr la sentencia. Pero la CC dictaminó el 20 de mayo que el tribunal no debió haber continuado con el juicio hasta que la recusación se hubiera resuelto.

“Desde el inicio del juicio, los abogados de la defensa han intentado enredar el proceso mediante recursos de amparo y finalmente lo lograron. Aquí ha prevalecido un litigio malicioso que finalmente termina en un fallo que provoca más impunidad”, dijo a IPS el presidente de la Comisión Internacional de Juristas, Ramón Cadena.

La CC todavía no ha aclarado si el cambio de tribunal implica que todo el proceso deberá repetirse desde el inicio. Según Rodríguez, la interpretación de los abogados de CALDH es que sí deberá empezar de cero, lo cual significa que los 98 testigos deban volver a declarar.

Pero debido a los reveses que ha sufrido el caso, las víctimas han perdido fe en la justicia y más de la mitad ha manifestado que no están dispuestos a declarar nuevamente, más aún en un contexto de tensión y hostigamiento al interior de las comunidades ixiles.

“Las víctimas han dicho que no son juguete para que se les esté llamando a cada rato. Confiaron en la justicia y ahora se sienten defraudados y con temor”, aseveró Rodríguez.

Cadena alberga pocas esperanzas de que, si llega a repetirse el juicio, se logre por segunda vez una sentencia condenatoria contra Ríos Montt.

“Si bien los jueces están mostrando mayor independencia, hay sectores del poder económico que no van a permitir que se juzgue a los poderosos”, dijo con tono sombrío.

Fuente: [Louisa Reynolds. IPS](#)

EL GENOCIDIO CONTINÚA

El 10 de mayo el Tribunal de Justicia de Guatemala condenó al ex-dictador, general Ríos Montt a 80 años de cárcel por las masacres contra pueblos indígenas en los años 80. Hubo gran esperanza de que el proceso judicial contra los criminales de la guerra sucia de Guatemala continuara. Pero diez días después del fallo, la Corte de Constitucionalidad revocó la sentencia. Mientras el pueblo protesta por la violación del Estado de Derecho,^[iii] los procesos de genocidio que Ríos Montt inició con sus masacres hace 30 años siguen su curso con otros métodos. En la última década la expansión de caña de azúcar para etanol y de palma aceitera en el norte de Guatemala ha desplazado a centenares de familias campesinas Maya-Q'eqchi', aumentando la pobreza, hambre, desempleo y falta de tierra en la región, afirma Alberto Alfonso-Fradejas en “Hijas e hijos de la Tierra”: Comunidades Indígenas y Acaparamiento de la Tierra en Guatemala .

El estado de Guatemala permitió y sigue permitiendo que la oligarquía aliada a la industria extractiva continúe desalojando a la población, sin importar el costo humano del desalojo, en muchos casos con asesinato y encarcelamiento a los y las pobladores rurales que resisten la embestida industrial. El genocidio contra la población indígena campesina en Guatemala ahora no tiene la cara de un dictador militar apoyado por los Estados Unidos—ahora son las corporaciones, la oligarquía y el mismo Banco Mundial quienes pretenden desaparecer a los campesinos de sus tierras.

Las catorce familias oligarcas que controlan las 14 compañías productoras de azúcar (AZAZGUA), las cinco compañías que controlan la producción nacional de etanol y las ocho familias que controlan la producción de palma aceitera (GREPALMA), miembros del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) están acaparando la tierra, apoyadas con inversiones de instituciones internacionales como el Banco Mundial, Banco Interamericano de

Desarrollo (BID) y Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). La confluencia de múltiples crisis: financiera, energética, alimentaria y ambiental a nivel mundial, ha disparado la inversión de las corporaciones en recursos derivados de la tierra como agrocombustibles, minerales, pastos y comida. Guatemala tiene cariz extremadamente violento de una tendencia global en que se juntan los intereses agrarios, financieros e industriales para acaparar tierras campesinas.

Para afirmar que el acaparamiento de tierras es una nueva forma de genocidio, es necesario citar el estudio de Ricardo Falla *¿Cómo que no hubo genocidio?* en el cual analiza la definición del mismo y sus características. De los cinco actos que definen el genocidio, Falla contempla dos, que más claramente se dieron en Guatemala: “matanza de miembros del grupo” y “sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial”.

Del primer genocidio, que se dio en tiempos de Ríos Montt contra los Ixiles, hemos pasado al segundo en el cual se priva a los Q’eqchi’ de sus medios de existencia a través de los acaparamientos de tierra. Centenares de familias han sido desplazadas, no tienen tierra para producir ni vivir, se niega su vida e identidad cultural-comunitaria; estas son condiciones que acarrear su destrucción física.

Se desarrolla un proceso histórico contra un genocida porque el pueblo organizado defiende sus derechos. La condena de Ríos Montt es una condena a la impunidad en sí. Por ello la oligarquía ha impedido el juicio, y continúa cometiendo genocidio contra la población campesina indígena, siendo respaldada por la inversión internacional y encubierta por el sistema legal que favorece los acaparamientos de tierra en detrimento de la población nacional.

Cuando la condena del Tribunal de Justicia fue revocada por la Corte de Constitucionalidad, dos de los cinco magistrados de la Corte se opusieron a la decisión. Al respecto, Pablo de Greiff, relator especial de Naciones Unidas para la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición señaló “no hay decisión legal que sea inconsecuente, aun si es revocada”. La Corte Interamericana de Justicia (CIJ) en comunicado criticó el veredicto por incumplir la obligación internacional asumida por el estado y porque impide avanzar en la búsqueda de la justicia. Múltiples organizaciones y autoridades se han pronunciado en contra de la decisión de la Corte, señalando que la misma excedió en sus funciones, violó preceptos legales y avaló los sucios mecanismos sobre los cuales se ha construido la impunidad en Guatemala.

La decisión evidencia la falta de independencia de este órgano respecto a los grupos económica y políticamente más poderosos. El 24 de mayo miles de personas manifestaron y entregaron carta con más de mil firmas a la CC exigiendo revertir la resolución. En Argentina, Chile, Honduras, México, Nicaragua y Perú miles de personas en solidaridad marcharon hacia la embajada de Guatemala exigiendo el cumplimiento de la justicia.

Si no se logra juzgar y condenar las masacres cometidas hace treinta años, ¿qué esperanza tienen las poblaciones Mayas Q’eqchi’, Xinca, Mam, Kaqchikel y otras que actualmente están siendo masacradas por las corporaciones extractivas amparadas por el estado y las instituciones internacionales? Los pueblos valientemente resisten y defienden su vida, su territorio y su identidad. ¿Cómo expresamos nuestra solidaridad?

(Fuente: [Leonor Hurtado](#). CIP Programa de las Américas)

HONDURAS

ESCANDALOSA CORRUPCIÓN EN COMPRA DE MEDICAMENTOS EN HONDURAS

La corrupción sigue generando escándalos en el Gobierno hondureño. Esta vez en el ministerio de Salud donde la misma ministra denunció compras millonarias de medicamentos defectuosos exigiendo una investigación inmediata.

El Gobierno de Honduras compró medicamentos adulterado, falsos y sobrevalorados, denunció la ministra de Salud, Roxana Araujo, por lo que fue suspendida por el presidente Porfirio Lobo, quien nombró en su lugar una junta interventora.

Las compras de medicamentos que superan los 25 millones de dólares ponen en peligro la vida de los pacientes de los hospitales públicos del país, ya que no cumplen con los estándares mínimos de calidad. Las medicinas adulteradas fueron vendidas por empresarios hondureños que tienen como voceros y accionistas a varios diputados del Congreso Nacional.

Las denuncias de la ministra de Salud, Roxana Araujo, dejan al descubierto los actos de corrupción de parte del Estado y la empresa privada en la adquisición millonaria de medicamentos en Honduras.

La vicepresidenta del Congreso Nacional, Lena Gutiérrez, forma parte del grupo de socios de Astropharma, una droguería que hasta el 2010, solo había ganado una licitación por valor de 482 mil 450 lempiras. Sin embargo, en ese año, la Secretaría de Salud Pública, le adjudicó dos contratos por un monto de 70 millones 528 mil 977 lempiras, con 14 centavos.

Un estudio presentado recientemente por el movimiento Transformemos Honduras (TH), presenta el caso de Astropharma como algo extraordinario, pues asegura que no hay otro proveedor con una participación tan casual en el mercado de medicamentos y con una cuota tan sustancial en los últimos dos procesos de compra. La investigación asegura que la compra de medicinas en la Secretaría de Salud Pública, presenta irregularidades basadas en los arreglos al margen de la ley y en la influencia económica, política y familiar.

La adjudicación de contratos, se amparó en el Decreto Ejecutivo PCM 012 – 2010, aprobado en Consejo de Ministros, el 13 de abril de 2010. La normativa se emitió a petición del Secretario de Salud, Arturo Bendaña Pinel, quien argumentó la escasez de medicamentos, en el cuadro básico nacional conformado por 420 productos. La normativa, autorizó la compra directa de medicinas por el orden de 200 millones de lempiras, equivalentes a más de 10 millones de dólares.

Cabe mencionar que al momento de ser adjudicados los contratos a Astropharma, Lena Gutiérrez, socia de la empresa, ya se desempeñaba como diputada y vicepresidenta del Congreso Nacional, situación que la coloca según el artículo 5 del Código de Conducta Ética del Servidor Público, en una condición de conflicto de intereses.

El inciso 3 del referido artículo, señala: “toda situación en la cual el interés personal, sea económico, financiero, comercial, laboral, político o religioso, de un servidor público, los de su cónyuge, compañero o compañera de hogar o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad se antepone al interés colectivo, incluyendo el interés personal que el servidor público pueda tener para beneficiar indebidamente a otra persona natural o jurídica”.

La emergencia declarada por el ejecutivo, dio la oportunidad para que las autoridades escogieran a las empresas que participarían en las licitaciones. Astropharma fue una de ellas. ¿Por qué será?, -Juzgue usted-.

Los contratos que el Estado le adjudicó a Astropharma en el 2010 corresponden a una compra directa por valor de 21 millones 777 mil 687 lempiras con 24 centavos y a una licitación pública por 48 millones 751 mil 289 lempiras con 90 centavos.

A pesar que mercado de medicamentos resulta atractivo por las inversiones que el Estado realiza, la concentración de contratos en un reducido número de proveedores, genera desequilibrios y desincentiva la competencia. En el país existen 214 laboratorios y droguerías oferentes, pero en los últimos cinco años, solo 37 empresas, lograron la adjudicación de contratos.

En los últimos cinco años, el Estado invirtió dos mil 545 millones 504 mil 782 lempiras con 02 centavos, equivalentes a 133 millones 833 mil 58 dólares con 99 centavos en medicamentos para el sistema sanitario nacional

Tomado de www.losnecios.com

MÉXICO

NUEVAS DETENCIONES DE INTEGRANTES DEL FNLS

A los Medios de Comunicación

A los organismos de Derechos Humanos,

A Enrique Peña Nieto.

A Miguel Ángel Osorio Chong.

A Manuel Velasco Coello.

En el marco estatal de búsqueda pacífica a la solución del conflicto prevaleciente en la comunidad de Venustiano Carranza, de la OCEZ-CP-FNLS, el gobierno responde con nuevas detenciones a integrantes del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS). Está en curso un operativo policiaco militar con la intención de poner en marcha las órdenes de aprehensión a militantes del FNLS, que inició a las 08:00am en la misma localidad; que se suma a la de los compañeros *Sebastián Gómez Vázquez, Miguel Vázquez Mendoza, José Ángel Alcázar Hidalgo, Juan Mendoza Espinoza, Rodrigo Díaz Solano, Ismael Díaz Coutiño, Catarina Gómez Martínez, José Manuel Vázquez Mendoza y José del Carmen Mendoza Espinoza* que aún siguen en el penal de mediana seguridad El Amate, desde el mes de mayo.

Hechos:

El día lunes 17 de junio, elementos de la Policía Estatal especializada, Ejército Federal y la Marina, llegaron a la casa del compañero José Vázquez Hernández (Pdte. Del comisariado de Bienes Comunales Casa del Pueblo de Venustiano Carranza) con la intención de detenerlo, en el Barrio San Pedro, pero él no se encontraba en ese lugar. A quien encontraron fue al compañero Miguel Hidalgo Vázquez (esposo de la compañera Catarina Gómez Martínez, quien se encuentra presa en El amate en Chiapas), con lujo de violencia fue detenido por dichos elementos. Cabe aclarar, que quienes acompañaban a las corporaciones policiacas eran Bartolo Pérez, Paola García Consuegra y José Martínez Calvo, entregadores de compañeros de la OCEZ, personas que fueron expulsados en asamblea por violar las normas internas de la comunidad, y que han fungido como grupo paramilitar.

Este grupo paramilitar fue desconocido en la comunidad por vender terrenos comunales al diputado Jesús Alejo Orantes Ruiz, violó las normas internas en todo momento, faltó a los acuerdos a la comunidad vendiendo el ganado colectivo de la comunidad.

Después de realizar la detención los elementos de los cuerpos represivos se replegaron por la escuela Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario Número 46, de la Comunidad de Venustiano Carranza.

En la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, fue retenido el sr. Juan Sebastián Espinoza, por parte del grupo paramilitar quienes se encuentran en plantón enfrente de las oficinas del gobierno, cuyo objetivo era lincharlo, quien no pertenece a nuestra organización.

Hasta el momento se sabe que el compañero Miguel Hidalgo Vázquez fue liberado a las 03:00 am de este 18 de junio, fue golpeado, y estuvo retenido todo el tiempo de su detención, en las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas, quien fue golpeado e interrogado sobre la situación prevaleciente en Carranza.

Mientras en la comunidad de Venustiano Carranza desde las 08:00 am durante las detenciones hechas por la policía, ejército, marina y paramilitares, se realizaban sobrevuelos sobre los barrios, vigilando e intimidando a nuestros compañeros, hasta las 03:00 pm.

Las detenciones se dan en un contexto en el que el gobierno de Chiapas, con Manuel Velasco Coello, y con el compromiso por escrito de Noé Castañón León como secretario de gobierno, de instalar una mesa de diálogo que ayude a destensar la situación en la comunidad, reflejando en los hechos la verdadera actitud y posición política ante la gravedad de las condiciones en la comunidad. Hasta el momento se teme por la situación de los que integramos el FNLS, por las detenciones extrajudiciales que pueden ocurrir en cualquier momento.

Es más de un mes de tensión y zozobra que existe en la comunidad indígena que ha trastocado y violentado todos los derechos humanos de todos los habitantes, vulnerando en todo momento tanto a niños, mujeres, ancianos al no poder recobrar la vida cotidiana; debido al tiempo de siembra existen posibilidades de que se pierdan los cultivos porque la presencia de los cuerpos represivos no permiten el libre tránsito de nuestros compañeros.

Hacemos un llamado atento a los organismos defensores de los derechos humanos a estar atentos a la presente situación y dirigir sus atenciones al gobierno estatal y federal para detener las acciones represivas.

A las organizaciones sociales, sectores organizados, y colectivos a pronunciarse por la represión que está en curso, por la liberación de los presos políticos, por las ordenes de aprehensión y la salida de los cuerpos represivos que mantienen en estado de sitio a la comunidad.

Responsabilizamos al gobernador del estado Manuel Velasco Coello, al secretario de gobierno Noé Castañón León, al diputado Jesús Alejo Orantes Ruiz, al subsecretario Mario Carlos Culebro Velasco, a Bartolo Pérez, Paola García Consuegra y José Martínez Calvo, de la integridad física y psicológica del compañero Miguel Hidalgo Vázquez, así como de los que militamos en el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo.

¡Libertad a los presos políticos y de conciencia!

¡Libertad a los 10 compañeros presos políticos de la OCEZ-CP-FNLS!

¡Alto a la represión!

Frente Popular Francisco Villa Independiente (FPFVI)

Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT)

Brigada Estudiantil Multidisciplinaria de la UNAM

Frente Nacional de Lucha por el Socialismo FNLS

NICARAGUA

FNT DENUNCIA COMLOT CONTRA INSS

El Frente Nacional de los Trabajadores (FNT) denunció este jueves un plan orquestado por la oposición que tiene el objetivo de destruir la seguridad social y tratar de afectar al Gobierno del Presidente Daniel Ortega.

"Estamos convencidos y queremos denunciar el plan de la derecha para destruir la seguridad social, golpear a los trabajadores, golpear a los jubilados, para golpear a los pensionados, debemos dejarlo claro" afirmó el coordinador del FNT, doctor Gustavo Porras.

El dirigente anunció una jornada de movilización en defensa de la seguridad social, los jubilados, pensionados y los adultos mayores que no se dejan manipular y aquellos que todavía reciben su bono de 1 mil córdobas y su paquete alimenticio.

Porras reiteró que un grupo de adultos mayores que protesta frente a las instalaciones del Instituto de Seguridad Social (INSS) son manipulados para realizar estas acciones de la derecha.

"Vamos a movilizarnos y ya estamos convocando a una movilización para el próximo lunes, vamos a defender la seguridad social y vamos apoyar al Gobierno del Comandante Daniel Ortega" dijo.

El dirigente reiteró que esta no solo es una acción contra la seguridad social, sino contra el Comandante Daniel Ortega y en contra de las aspiraciones del pueblo nicaragüense, porque la están haciendo a raíz que la derecha se siente desvalijada, porque se anuncia por primera vez, la posibilidad de salir de la pobreza en este país.

En este sentido, señaló la construcción del Gran Canal de Nicaragua y cómo se ha ido mejorando en los aspectos económicos y la restitución de derechos a los nicaragüenses con los programas sociales.

"Entonces vamos a salir a calles sentencié Porras" acompañado de líderes de las distintas organizaciones gremiales que integran el Frente Nacional de los Trabajadores.

Informa: Radio La Primerísima

PANAMÁ

AUMENTO DE DEUDA Y NECESIDADES

Bajo el concepto del progreso, el Gobierno endeuda el país, a niveles inimaginables. Aumenta el costo de vida y las enfermedades, muchas producto del estrés y falta de alimentación adecuada.

Como en la procesión del Cristo Negro de Portobelo, funciona el Gobierno al dar tres pasos adelante y dos para atrás. El progreso es necesario, siempre y cuando no trastoque la paz, seguridad, felicidad, salud y economía de los hogares, fundamentalmente, de la clase media y baja.

No se trabaja para vivir, se vive para trabajar. Posiblemente desde el vientre, las criaturas sienten muchas necesidades, por la mala nutrición y/o estrés de la madre.

Tenemos que hacer una reingeniería mental, todos. Romper paradigmas y estructurar objetivos y metas para Panamá. Si el país progresa, progresamos todos. Cuando está convulsionado, estaremos estresados todos.

La falta de previsión de quienes gobiernan tiene a la población en un estrés permanente. Se aumenta el salario mínimo, pero se suben los impuestos, el precio del combustible, de los alimentos, la luz, el transporte, etc.

El incremento salarial pareciera ser una necesidad, pero el salario mínimo solo beneficia a un sector, que al final con el alza general de precios y de la canasta básica de alimentos, proporciones guardadas, queda en situación de desventaja, que golpea más a quienes perciben un sueldo que se ubica entre el salario mínimo y los mil balboas, porque ellos no reciben aumento; finalmente, el salario mínimo se hace inferior al anterior.

Los tiempos de crisis implican cautela, no desesperación. Vivimos bajo la administración de gobiernos reactivos a las situaciones y, por ello, no existen planes a largo plazo. Se administra para el momento, por cinco años de gobierno partidista. Error.

Se autoriza la tala de bosques, rellenos de manglares, bahías y costas; se autoriza o promueve la minería, se venden nuestras tierras campesinas a extranjeros, minimizando la producción; todo esto genera crisis como la ocurrida con el reciente problema energético y el actual alimentario.

Se construyen la cinta costera 2 y 3, a más de mil millones de dólares, por unos cuantos kilómetros, pero no una carretera a cuatro vías entre Veraguas y Chiriquí, cuyo costo sería de menos de la mitad del gasto por un tramo de 230 kilómetros. Un total contrasentido social. La carretera es una necesidad de la población, en general, tanto para el transporte humano como el de productos, mientras que la cinta costera es un lujo turístico.

El progreso es necesario, pero no se habla ni se cubren las necesidades reales como: el hambre, falta de vías de comunicación, ausencia de agua en diversas comunidades, exceso de basura en las ciudades; en fin, se busca progreso para el turismo y los trogloditas, mientras el resto perdemos calidad de vida. Tres pasos adelante y dos para atrás. ¡Dios te salve, Panamá!

Publicado por Victoriano Rodríguez S. en La Prensa

PUERTO RICO

EL PRESO POLÍTICO MÁS ANTIGUO DE AMÉRICA LATINA

Estados Unidos ocupó Puerto Rico contra la voluntad de su pueblo en 1898 y hasta hoy lo mantiene en condición colonial. Ha hecho cuando ha podido por despojarlo de sus raíces culturales, su idioma,

su sentimiento nacional y su autoestima y por reprimir o ningunear a quienes reivindican estos derechos. Sin embargo, la identidad puertorriqueña ha sido más resistente que el poderío económico, político y militar de Washington.

De tanto en tanto, y por sobre banderías político-ideológicas, creencias religiosas y diversidades esa identidad estalla en rebeldía desde lo profundo del alma nacional. Entonces a Puerto Rico lo une una causa común que desafía al opresor y no hay fuerza en el mundo capaz de quebrarlo. Ocurrió en la victoriosa batalla por sacar a la marina yanqui de Vieques y en la lucha por la libertad de sus presos políticos en los setentas y los noventas. En la unánime condena en 2005 al premeditado asesinato por la FBI del líder independentista Filiberto Ojeda y sus posteriores honras fúnebres, comparables con las del venerable prócer Pedro Albizu Campos en 1965. En ambos casos, la isla se paralizó y les rindió su más sentido tributo.

Hoy ocurre igual con el reclamo por la libertad del también militante por la independencia puertorriqueña Oscar López Rivera, el preso político más antiguo de América Latina. El 29 de mayo Oscar cumplió 32 años tras los inclementes barrotes de las cárceles de Estados Unidos.

Ese día cientos de personalidades en San Juan y otras cuatro ciudades de Puerto Rico se encerraron simbólicamente en celdas diseñadas por el pintor Nick Quijano, iguales en sus diminutas dimensiones a la que ocupa Oscar. Dijeron presente representantes de todas las tendencias políticas, entre ellos connotados independentistas como Carlos Gallisá o Martha la viuda del finado líder Juan Mari Bras, el ex gobernador Aníbal Acevedo Vilá, las alcaldesas de San Juan Carmen Yulín y de Ponce María Meléndez así como sus pares de otros municipios, René Martínez el Residente de Calle 13, otros relevantes artistas e intelectuales, conocidos periodistas, la presidenta del Colegio de Abogados Ana Irma Rivera, peloteros de grandes ligas, universitarios, obispos y líderes de todas las iglesias, activistas de la comunidad LGBT, diputados, senadores, empresarios, eminentes médicos y abogados. El cantante Ricky Martin envió un cálido mensaje de solidaridad desde Australia y el gobernador Alejandro García Padilla expresó que su excarcelación es un asunto de “justicia social, humanidad y compasión” por lo que la había reclamando al presidente Barak Obama.

Nacido en el pueblo de San Sebastián, los padres de Oscar lo llevaron a vivir a Chicago intentando huir de la pobreza. Combatiente condecorado de Vietnam, allí comenzó su toma de conciencia anticolonial. Al regreso de la guerra a la ciudad de los vientos devino un dinámico activista por la educación descolonizadora, la cultura puertorriqueña, contra la discriminación racial y por la independencia de su patria.

Acusado de pertenecer a las independentistas Fuerzas Armadas de Liberación Nacional la fiscalía gringa le levantó el difuso cargo de conspiración sediciosa (“intento de derrocar por la fuerza al gobierno de Estados Unidos en Puerto Rico”). El premio Nobel Desmond Tutu –una de muchas personalidades internacionales que piden su liberación- ha dicho que lo que el cargo quiere decir es “conspirar para liberar a su pueblo de la justicia imperial”. Negado a aceptar la jurisdicción de los tribunales yanquis, Oscar se declaró prisionero de guerra en una lucha anticolonial y rehusó cooperar con el proceso. Aunque no pudieron probarle ninguna acusación y su conducta como recluso ha sido ejemplar, la exorbitante sentencia impuesta expiraría en 2023.

Mantenido en confinamiento solitario 12 años, no salió de su celda más que unas pocas horas a la semana, nunca vio la luz natural y se le impidieron las visitas. Cuando las pudo recibir fue al otro lado de un cristal antibalas.

Su hija se hizo mujer sin poder tocarlo y su nieta sólo lo pudo abrazar siendo una adolescente. Ha sufrido constantes tratos inhumanos y degradantes incluyendo negativa de asistencia médica, debidamente documentados. La ONU ha pedido su liberación.

Hombre de gran sensibilidad, ha hecho una notable obra pictórica y epistolar en prisión. Nací boricua, seguiré siendo boricua y moriré boricua, ha dicho. Apoyémoslo para que así sea, pero en su patria y libre. ¡Viva Puerto Rico libre!

Fuente: [Ángel Guerra Cabrera. Rebelión](#)

VENEZUELA

VENEZUELA SERÁ RECONOCIDA POR LA FAO EN ROMA POR SUS PROGRESOS NOTABLES EN LA LUCHA CONTRA EL HAMBRE

En el marco del 38° Periodo de sesión de la Conferencia de la FAO en Roma se realizará un acto especial en "Reconocimiento de los progresos notables y excepcionales en la lucha contra el hambre" para honrar los avances de 17 países, entre los cuales se incluye Venezuela, en su batalla contra el hambre.

En el año 2000, en la Asamblea General de las Naciones Unidas, 189 países se comprometieron a liberar a las personas de numerosas privaciones y ofrecer un nivel de vida mínimo que incluya estar exento de hambre. Este compromiso se tradujo en la formulación de los ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). El ODM 1 expresa el deseo de erradicar la pobreza extrema y el hambre. Así, además de la meta de reducir a la mitad la pobreza mundial para el año 2015, se fijó la meta de reducir a la mitad la proporción de personas que padecen hambre en el mismo plazo.

Según las estimaciones más recientes de la FAO, Venezuela forma parte del grupo de 17 países, entre los que se cuenta Cuba, Guyana, Nicaragua, Perú, San Vicente y las Granadinas, que han realizado progresos excepcionales, al haber reducido la prevalencia de la subnutrición del 13.5% en el periodo 1990-1992 a menos de 5% en el periodo 2010-2012 y haber alcanzado así la meta del ODM 1 referente al hambre.

INFLACIÓN SUBIÓ UN 6,1% EN MAYO EL ÍNDICE ANUALIZADO SE DISPARA AL 35,2%

El Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) varió en mayo pasado 6,1%, con lo que acumula un incremento de 19,4% durante los primeros cinco meses de este año, y un ajuste anualizado de 35,2%, informó este jueves el Banco Central de Venezuela (BCV).

Al desagregar por sectores, se observa que solo uno se situó por encima del 6,1% global, mientras que servicios de la vivienda apenas se incrementó 0,1%.

Alquiler de vivienda varió 0,8%; comunicaciones, 1,5%; servicios de educación, 1,7%; esparcimiento y cultura, 2,1%; bienes y servicios diversos, 2,4%; salud, 2,5%; vestido y calzado, 3,4%; transporte, 3,9%; equipamiento del hogar, 5%; bebidas alcohólicas y tabaco, 5,1%; restaurantes y hoteles, 6%; y alimentos y bebidas no alcohólicas, 10%.

"Estas cifras se dieron en un escenario afectado por el efecto residual del ajuste cambiario de febrero y por el aumento del salario mínimo a partir del 1° de mayo", precisó el comunicado del BCV.

En los alimentos y bebidas no alcohólicas, "resultaron determinantes, por una parte, el aumento de 20,4% en los productos agrícolas y, por otra, el ajuste del precio oficial de algunos rubros sujetos a control". El Ejecutivo Nacional autorizó el mes pasado un incremento en los precios regulados de la leche, el queso, el pollo y la carne, para mantener el equilibrio de los sectores productivos.

Asimismo, la variación en transporte recoge "los efectos del aumento de las tarifas del traslado terrestre de pasajeros, vigentes a partir de abril".

En abril, el indicador, medido por el ente emisor y el Instituto Nacional de Estadística (INE), subió 4,3%, mientras que en mayo de 2012 lo hizo 1,6%. Para el año pasado, la inflación entre enero y mayo se situó en 6%, al tiempo que la anualizada para mayo 2012 fue de 22,6%.

AVN

OPOSICIÓN VENEZOLANA COMPRÓ 18 AVIONES DE GUERRA DE EE.UU.

La oposición venezolana adquirió 18 aviones de guerra de EE.UU., según reveló el exvicepresidente del país latinoamericano José Vicente Rangel. Las aeronaves estarían estacionadas en una base militar de EE.UU. en Colombia.

Este domingo en su programa televisivo 'José Vicente Hoy', José Vicente Rangel reveló datos sobre un contrato de compra de vehículos aéreos de combate firmado por la oposición venezolana y

EE.UU. a finales de mayo pasado. Según Rangel, el pasado 27 de mayo se llevó a cabo una reunión en San Antonio, Texas (EE.UU.), entre venezolanos opositores y ejecutivos de la industria de aviones de guerra. “Luego de hojear los catálogos [los opositores] firmaron contrato por 18 aviones de guerra, que serían estacionados en una base militar de Estados Unidos en Colombia, la cual tiene las coordenadas P 11° 25' 31", M 72° 7' 46"”, precisó. Según el exvicepresidente, el contrato de compra podría ser efectivo ya en noviembre próximo e instó a las autoridades de Venezuela a revisar esta información “extremadamente grave”. “La información no debe ser subestimada, dado el clima de agresiones mediáticas y políticas contra Venezuela. ¿Se prepara una agresión armada debidamente camuflada con la participación de mercenarios, como ha ocurrido en varias naciones?”, manifestó.

José Vicente Rangel